

Oficio No. CNDH/P/UT/2404/2024

Plataforma Nacional de Transparencia: 330030924001205

Ciudad de México, a 15 de noviembre de 2024

APRECIABLE PERSONA SOLICITANTE:

Me refiero a su solicitud de acceso a la información pública, registrada en la Unidad de Transparencia de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos con el número folio de la Plataforma Nacional de Transparencia de referencia, misma que a la letra dice:

“1. ¿Cuáles han sido las acciones específicas tomadas por el Gobernador de Querétaro en respuesta a la Recomendación 153VG/2024 respecto a las violaciones de derechos humanos en la comunidad de Escolásticas? 2. ¿Qué medidas se han implementado para garantizar la atención y reparación integral a las víctimas mencionadas en la recomendación? 3. ¿Cuántas personas han sido inscritas en el Registro Estatal de Víctimas como resultado de esta recomendación? 4. ¿Cuál es el estado actual del trámite ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en relación con la Recomendación 153VG/2024? 5. ¿Qué acciones han tomado las autoridades municipales de Pedro Escobedo, Huimilpan y El Marqués para atender las recomendaciones de la CNDH? 6. ¿Cómo se está garantizando la capacitación del personal en derechos humanos para prevenir futuros casos de tortura y detenciones arbitrarias? 7. ¿Qué mecanismos de seguimiento se han implementado para evaluar el cumplimiento de las acciones recomendadas por la CNDH? 8. INFORME SOBRE LAS DISCULPAS PUBLICAS. COMO ES QUE SE DIERON ¿Cuáles son los procedimientos establecidos para ofrecer disculpas públicas a las víctimas y sus familias, y qué seguimiento se está dando a esta medida? 9. ¿Se han iniciado procesos de investigación interna en relación con las violaciones a los derechos humanos señaladas en la recomendación? Si es así, ¿cuál es su estado actual? 10. ¿Cuál es la situación actual del expediente de queja relacionado con las violaciones de derechos humanos en la comunidad de Escolásticas? 11. ¿Se han realizado auditorías o revisiones sobre la actuación de los funcionarios involucrados en los actos de tortura y detenciones arbitrarias? 12. ¿Qué criterios se UTILIZARON para seleccionar al personal encargado de impartir las capacitaciones en derechos humanos mencionadas en la Solicitud? Solicito una copia del informe sobre las acciones y medidas adoptadas por el Gobernador de Querétaro en respuesta a la Recomendación 153VG/2024. 13. Solicito los informes de seguimiento así como los documentos relacionados con el cumplimiento de las medidas recomendadas.” (sic)

Al respecto, con fundamento en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), le comunico que su solicitud de acceso a la información fue turnada a las áreas competentes que integran la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de acuerdo a

sus atribuciones realicen una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, por lo que se informa lo siguiente:

Con relación a su requerimiento, relativo a: “1. *¿Cuáles han sido las acciones específicas tomadas por el Gobernador de Querétaro en respuesta a la Recomendación 153VG/2024 respecto a las violaciones de derechos humanos en la comunidad de Escolásticas?* 2. *¿Qué medidas se han implementado para garantizar la atención y reparación integral a las víctimas mencionadas en la recomendación? [...]* 5. *¿Qué acciones han tomado las autoridades municipales de Pedro Escobedo, Huimilpan y El Marqués para atender las recomendaciones de la CNDH? [...]*” (sic), me permito hacer de su conocimiento que la información requerida son acciones propias de las autoridades recomendadas dentro de la Recomendación 153VG/2024; en tal sentido, atentamente se sugiere direccionar su solicitud a dichas autoridades; toda vez que, en términos de sus facultades, podrán conocer de su requerimiento.

Por otro lado, en cuanto a: “[...] 3. *¿Cuántas personas han sido inscritas en el Registro Estatal de Víctimas como resultado de esta recomendación? [...]*” (sic), le informo que han sido registradas 15 personas.

En lo referente a: “[...] 4. *¿Cuál es el estado actual del trámite ante la Comisión Estatal de Atención a Víctimas en relación con la Recomendación 153VG/2024? [...]*” (sic), como se informó en el párrafo anterior, se tiene que 15 personas víctimas han sido inscritas en el Registro Estatal de Víctimas; ahora bien, considerando que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no es autoridad recomendada en la citada Recomendación, no tiene la obligación de remitir pruebas de estado que guarda el trámite ante dicha autoridad, por lo que, se sugiere direccionar su solicitud a esa Comisión Estatal, ya que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones podrá conocer de su requerimiento.

Por lo que hace a: “[...] 6. *¿Cómo se está garantizando la capacitación del personal en derechos humanos para prevenir futuros casos de tortura y detenciones arbitrarias? [...]* 8. **INFORME SOBRE LAS DISCULPAS PUBLICAS. COMO ES QUE SE DIERON** *¿Cuáles son los procedimientos establecidos para ofrecer disculpas públicas a las víctimas y sus familias, y qué seguimiento se está dando a esta medida? [...]* 11. *¿Se han realizado auditorías o revisiones sobre la actuación de los funcionarios involucrados en los actos de tortura y detenciones arbitrarias?* 12. *¿Qué criterios se UTILIZARON para seleccionar al personal encargado de impartir las capacitaciones en derechos humanos mencionadas en la Solicito una copia del informe sobre las acciones y medidas adoptadas por el Gobernador de Querétaro en respuesta a la Recomendación 153VG/2024. [...]*” (sic), le informo que, después de realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos físicos y electrónicos de este Organismo Público, no se localizó expresión documental que brinde respuesta a sus requerimientos, en los términos planteados; en todo caso, son las autoridades

recomendadas las que podrán atender sus requerimientos, por lo que, la sugerencia es direccionar su solicitud ante dichas autoridades.

En cuanto a: “[...] 7. *¿Qué mecanismos de seguimiento se han implementado para evaluar el cumplimiento de las acciones recomendadas por la CNDH? [...]*” (sic), cabe señalar que esta Comisión Nacional realiza el seguimiento sobre el cumplimiento de los puntos recomendatorios, de conformidad con los artículos 33, fracciones I, II, V y XIII, 136, 137 y 138 del Reglamento Interno de la CNDH.

Respecto a: “[...] 9. *¿Se han iniciado procesos de investigación interna en relación con las violaciones a los derechos humanos señaladas en la recomendación? Si es así, ¿cuál es su estado actual? [...]*” (sic), es preciso hacer mención que este Organismo Protector de Derechos Humanos no cuenta, dentro de sus facultades, la de iniciar procesos de investigación interna; por lo que, de nueva cuenta se sugiere direccionar su requerimiento a las autoridades recomendadas.

Con relación a: “[...] 10. *¿Cuál es la situación actual del expediente de queja relacionado con las violaciones de derechos humanos en la comunidad de Escolásticas? [...]*” le comunico que, de la búsqueda realizada, se obtuvo que el único expediente relacionado con su solicitud de información se concluyó con la emisión de la Recomendación 153VG/2024.

Ahora bien, respecto a: “[...] 13. *Solicito los informes de seguimiento así como los documentos relacionados con el cumplimiento de las medidas recomendadas.*” (sic), le comunico que la información requerida se encuentra contenida físicamente en el expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, el cual está contenido en **999** fojas; es de señalar que la información requerida contiene datos personales, considerados información confidencial.

Por lo tanto, para estar en posibilidad de dar respuesta a la solicitud de acceso a la información en cita, en términos de los artículos 98, 102, 103, 106, 113 fracción I, 117, 118, 119 120 y 137, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los ordinales Cuarto, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Trigésimo octavo de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, de la información generada por este Organismo Nacional es necesario elaborar versión pública, mediante la cual se testan las partes o secciones protegidas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación, llevándose a cabo sobre los datos personales, los cuales puedan hacerlas identificadas o identificables, ya que únicamente tendrá

acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes, así como los servidores públicos facultados para ello, la cual no estará sujeta a temporalidad alguna.

Adicionalmente, es de señalarse que en la documentación requerida se observó que existe información susceptible de clasificarse como reservada, en virtud de que se encuentran expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, así como aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público y de expedientes de procedimientos administrativos, por lo que se constituye como información RESERVADA, de manera que resulta improcedente y jurídicamente inviable dar acceso a la misma, de conformidad con los artículos 3°, 4°, 24 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 5° y 78 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; 113, fracciones IX, XI y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); 110, fracciones IX, XI y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP); así como los lineamientos Vigésimo Octavo, Trigésimo y Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos).

Es importante mencionar que, la clasificación parcial de información confidencial y reservada fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual, mediante acta de sesión ordinaria, misma que se transcribe en su parte conducente, resolvió lo siguiente:

“ [...]

En términos de lo dispuesto en los artículos 64, 65 fracción II, 102, 110, 113 y 140 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se lleva a cabo el análisis de la clasificación de información confidencial y reservada que sometió la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, para lo cual de forma fundada y motivada se describirá la información a proteger, contenida en el expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, requerido por la persona solicitante:

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de víctimas y testigos:

El nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de víctimas y testigos, constituye un dato personal concerniente a una persona identificada, de conformidad con los artículos 116, primer y segundo párrafos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 113, fracción I, y último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone que el nombre constituye el dato que hace identificable a su titular por excelencia, al ser un atributo de la personalidad y la manifestación principal del derecho a la identidad, por sí mismo permite identificar a una persona física, y debido a que este sujeto obligado no cuenta con la autorización por escrito de la persona que tiene derecho a solicitarla, no es procedente su difusión.

Domicilio de personas físicas:

El domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato personal confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

En tal virtud, los domicilios de terceros son datos personales, ya que hacen identificada a una persona física y atañen a su esfera privada, por lo que son confidenciales en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Número telefónico:

El número de teléfono es el número que se asigna a una persona física o moral (ya sea fijo o móvil), por lo que pertenece a la esfera privada del mismo.

Es por lo anterior, el número asignado a un teléfono particular permite localizar a una persona física identificada o identificable, por lo que se considera dato personal confidencial ya que sólo podrá otorgarse mediante el consentimiento de su titular, conforme a lo dispuesto en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Correos electrónicos:

El correo electrónico se puede asimilar al teléfono o domicilio, cuyo número o ubicación, respectivamente, se considera como un dato personal, toda vez que es otro medio para comunicarse con la persona y su denominación la hace localizable, por lo cual, si se da a conocer, afectaría la intimidad de la persona.

En tal virtud, es susceptible de clasificarse conforme al artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad:

Dicha información revelaría el estado o país del cual es originario un individuo, así como la edad de una persona, lo cual es parte de la esfera privada.

En tales consideraciones, dicha información es susceptible de clasificarse conforme a lo referido por el artículo 113 fracción I de la LFTAIP.

Estado civil:

El estado civil es un atributo de la personalidad que se refiere a la posición que ocupa una persona en relación con la familia. por su propia naturaleza es considerado como un dato personal, en virtud de que incide en la esfera privada de los particulares.

De tal situación, es necesario considerarlo como confidencial. en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Ocupación:

La ocupación de una persona física identificada o identificable podría reflejar el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada o ideología de una persona, datos que corresponden únicamente al titular divulgarlos.

En ese sentido, se actualiza su clasificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Clave Única de Registro de Población (CURP) y Acta de Nacimiento:

Dicha Clave se integra por datos personales, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo, siendo un instrumento que sirve para registrar en forma individual a todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros, así como a las personas mexicanas que radican en otros países en los registros de personas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Por lo que se clasifica dicho dato en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC):

El RFC, lleva la misma suerte que la CURP, solo que la inscripción a dicho registro se lleva a cabo con la intención de realizar operaciones o actividades fiscales y es individualizado.

A mayor abundamiento, el Registro Federal de Contribuyentes, vinculado al nombre de su titular, permite identificar la edad y fecha de nacimiento de la persona. así como determina su identificación para efectos fiscales ante las autoridades tributarias.

En ese tenor, dicha información confidencial conforme al artículo 113. fracción I de la LFTAIP.

Datos personales contenidos en la credencial de elector:

Al respecto, el artículo 131 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que ahora el Instituto Nacional Electoral debe expedir a los ciudadanos la credencial para votar, documento indispensable que les permite ejercer el derecho al voto.

Ahora bien, respecto de la información contenida en las credenciales para votar, cabe señalar lo dispuesto en el artículo 156 del citado ordenamiento legal:

"Artículo 156.

1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:

- a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos; señalará la de su elección, en definitiva;*
- b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;*
- c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;*
- d) Domicilio;*
- e) Sexo;*
- f) Edad y año de registro;*
- g) Firma, huella dactilar y fotografía del elector;*
- h) Clave de registro, y*
- i) Clave Única del Registro de Población.*

2. Además tendrá:

- a) Espacios necesarios para marcar el año y lección de que se trate;
- b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
- c) Año de emisión;
- d) Año en el que expira su vigencia, y
- e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda "Para Votar desde el Extranjero".

3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio.

4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en el formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine el Consejo General."

Asimismo, en la página de internet del Instituto Nacional Electoral, se encuentran publicadas las características de la credencial para votar. La credencial para votar contiene diversa información que, en su conjunto, configura el concepto de dato personal previsto en la LFTAIP, al estar referida a personas físicas identificadas, tales como: domicilio, edad y año de registro, firma autógrafa, huella digital, fotografía del elector y clave de registro.

Domicilio particular. Como se dijo el domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que constituye un dato confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

Edad. La edad es información que, por su propia naturaleza, incide en la esfera privada de los particulares, refiriéndose a los años cumplidos por una persona física identificable, de esta manera; se actualiza el supuesto de clasificación previsto en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Fotografía. La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes captadas. En concordancia con lo anterior, la fotografía constituye el primer elemento de la esfera personal de todo individuo, en tanto funge como un instrumento básico de identificación y proyección exterior, y es un factor imprescindible de reconocimiento como sujeto individual; por lo tanto, es un dato personal.

Número OCR. El número de credencial de elector corresponde al denominado "Reconocimiento Óptico de Caracteres". En este sentido, 'dicho número de control, al contener el número de la sección electoral en donde vota el ciudadano titular de dicho documento, constituye un dato personal en razón de que revela información concerniente a una persona física identificada o identificable en función de la información geoelectoral ahí contenida, susceptible de resguardarse. Clave de elector. La clave de elector se compone de 18 caracteres y se conforma con las primeras letras de los apellidos, año, mes, día y clave del estado en que su titular nació, sexo y una homoclave interna de registro; derivado de lo cual, la clave referida ha sido considerada por el Pleno como dato personal objeto de confidencialidad.

Estado, municipio, localidad y sección, estos datos corresponden a la circunscripción territorial donde un ciudadano debe ejercer el voto, por lo que, al estar referida a un aspecto personal del titular de dicho documento, se considera que actualiza la confidencialidad prevista en la Ley de la materia.

Año de registro y vigencia. Se considera que dichos datos son considerados datos personales con el carácter de confidencial, cuya difusión permite conocer el año en que un individuo se convirtió en elector y la fecha en que deja de tener validez su credencial; tal información es un dato personal de carácter confidencial que amerita sea clasificado, según lo dispuesto en el dispositivo legal apenas invocado.

Espacios necesarios para marcar el año y elección. Los espacios necesarios para marcar el año y elección constituyen información personal, porque permite conocer cuando una determinada persona ejerció su derecho al voto, por lo que debe ser protegida por este Instituto mediante su clasificación como confidencial.

Huella digital es considerada como un dato biométrico que muestra características únicas que identifican a una persona. En ese sentido, las "Recomendaciones sobre medidas de seguridad aplicables a los sistemas de datos personales", emitidas por el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, establecen lo siguiente:

"C. Nivel alto

Los Sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se en lista n a continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio, deberán observar las marcadas con nivel alto."

Datos Ideológicos:

Datos de Salud:

Características personales: Tipo de sangre. ADN, huella digital, u otros análogos.

En virtud de lo anterior, la huella digital es un dato personal susceptible de clasificarse como confidencial.

Por todo lo anterior, se determina que la credencial de elector contenida en los expedientes requeridos es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Sexo:

El sexo permite distinguir las características biológicas, e incluso, físicas y fisiológicas (sus órganos reproductivos, cromosomas, hormonas, etcétera) de las personas, dato que incide directamente en su ámbito privado y que en ciertos casos por sí mismo o en conjunción con elementos adicionales, permite la identificación de una persona en particular, de manera que, en tanto dato personal, se clasifica como información confidencial, con fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Género:

El género es una construcción social, independiente de la condición biológica de la persona (sexo) aspectos fisiológicos y fisionómicos, información que incide directamente en la esfera más íntima de la persona, que puede dar lugar a discriminación, motivo por el cual es susceptible de clasificarse conforme a lo referido por los artículos 113, fracción I de la LFTAIP y artículo 3, fracción X de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Número de pasaporte:

El pasaporte es un documento de viaje que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores a los mexicanos para acreditar su nacionalidad e identidad, y solicitar a las autoridades extranjeras que permitan el libre paso, proporcionen ayuda y protección a su titular.

Es por ello que de la lectura del mismo puede identificar el nombre y nacionalidad del titular; por lo que dicho dato se considera como confidencial conforme el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Imagen fotográfica de persona física:

La fotografía constituye la reproducción fiel de la imagen de una persona, objeto o cosa, obtenida en papel a través de la impresión en un rollo o placa por medio de una cámara fotográfica, o en formato digital, que constituye la reproducción fiel de las imágenes captadas, de lo cual, haría identificable a una persona por sus rasgos físicos o fisionómicos específicos.

Por tanto, es procedente resguardar las fotografías de personas físicas en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Números de cédula profesional:

La cédula profesional es el documento que acredita a determinada persona como autorizada para ejercer la profesión indicada en la misma, a la cual corresponde un número irrepetible, de manera que a través de este último es posible identificar indubitadamente al o la persona a quien le fue expedida dichos datos: configura como información confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Tarjeta de Identidad:

El documento de identidad, también conocido como cédula de identidad, cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, tarjeta pasaporte, registro civil, cédula de extranjería, carné de identidad, documento nacional de identidad, documento único de identidad, identificación oficial o simplemente identificación, dependiendo de las denominaciones utilizadas en cada país, es un documento público que contiene datos de identificación personal, emitido por autoridad competente para permitir la identificación personal e inequívoca de los ciudadanos, le permite al ciudadano identificarse en los ámbitos de actuación dentro de su país, por lo que se constituye como confidencial en términos del artículo 113 fracción I, de la LFTAIP.

Número de licencia de conducir:

Es el documento que expide la autoridad competente en materia de transporte, vialidad o movilidad, mediante el cual se otorga a la persona el permiso para conducir un vehículo automotor. La licencia de conducir se integra por un número que la distingue con información numérica, alfabética, irrepetible, personalizada e individual; tipo de sangre, Registro Federal de Contribuyentes, nacionalidad, firma, fotografía y antigüedad; datos que son considerados como información confidencial. En este sentido, dar a conocer el número de licencia de conducir vincula al documento con una persona física, permitiendo el acceso a los datos personales contenidos en

él, los cuales son únicamente del interés del titular, en tal orden de ideas, se estima procedente clasificarlo como confidencial, lo anterior de conformidad con el artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Nivel educativo:

Nivel educativo de una persona física reflejan el grado de estudios, preparación académica, preferencias sobre la profesión adoptada o ideología de una persona o condición económica, datos que al ser divulgados podrían afectar la esfera privada de su titular, dar lugar a discriminación o poner en riesgo su integridad y la de su familia; razón por la cual, dicha información es susceptible de clasificarse como confidencial en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE INFORMACIÓN RESERVADA:

- **Respecto de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.**

El artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Trigésimo de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas (en adelante Lineamientos Generales), establecen que podrá considerarse como información reservada aquella que vulnere la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio.

Prueba de daño: con fundamento en los artículos 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño y que, para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada, en ese sentido, se invoca la siguiente:

PRIMERO. Se acredita que la divulgación de la información relativa a los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio que se encuentran en trámite, contenidos dentro de las constancias que integran el expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, representaría un riesgo real, demostrable e identificable, tomando en cuenta que las acciones y/u omisiones de los servidores públicos, que vulneraron derechos humanos, proporcionar información que la autoridad ha remitido en cumplimiento a la Recomendación es información sensible de las partes que podrían afectar la integridad de los

involucrados en la investigación que se lleva ante las autoridades competentes, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, o incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso, lo que representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación integral del daño de la víctima se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artículo 27, fracción IV y 73, fracciones I, III y V, de la Ley General de Víctimas.

SEGUNDO. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación que realizan las Fiscalías, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en este caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.

TERCERO. La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a los números de procesos penales, que se señalen las autoridades recomendadas en las pruebas de cumplimiento que han remitido como parte del expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, así como la información que se refiere a actuaciones, que las autoridades recomendadas realizan ante los procedimientos, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para resolver las investigaciones o quejas, así como los procedimientos de responsabilidad que se relacionan con el seguimiento de la recomendación que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos 1, y 108, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Periodo de reserva: En consecuencia, se considera necesario reservar por un periodo de **cinco años**, de conformidad con lineamiento Trigésimo Cuarto, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.

- **Respecto de aquella contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público**

En términos de lo previsto en los artículos 113, fracción XII de la LGTAIP y 110, fracción XII de la LFTAIP y del lineamiento Trigésimo Primero de los Lineamientos Generales, se precisa que la información vinculada con números de averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que se tramitan ante el agente del ministerio público se clasifica como reservada, por lo que resulta improcedente y jurídicamente inviable proporcionar acceso a su contenido.

Prueba de Daño. *Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

PRIMERO. *Se acredita que la divulgación de la información relativa a las averiguaciones previas o carpetas de investigación, representa un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que por acciones y/u omisiones de los servidores públicos, se vulneraron derechos humanos, por lo que dichos expedientes contienen información sensible de las partes que podrían afectar la integridad de los involucrados en la investigación que se lleva ante la Fiscalía General de la República y las Fiscalías Estatales, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos, alterar el curso de la investigación, o incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda en cada caso, lo que representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación integral del daño de la víctima se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artículo 27, fracción IV y 73, fracciones I, III y V, de la Ley General de Víctimas.*

SEGUNDO. *Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación que realizan dichas Fiscalías, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en este caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en la investigación.*

TERCERO. *La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa al número de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se señalen las autoridades recomendadas en las pruebas de cumplimiento que han remitido como parte del expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es*

proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para resolver las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación que se relacionan con el seguimiento de la recomendación que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el expediente en cita se reserva por un periodo de cinco años, o en su caso aplique lo establecido en el artículo 101, fracciones I y II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen los supuestos en los que los documentos clasificados como reservados serán públicos.

Periodo de reserva. *En términos de lo previsto en los artículos 99, párrafo segundo y 100 de la LFTAIP y con apoyo en los criterios que establece el lineamiento Trigésimo Cuarto de los Lineamientos Generales, la información descrita se clasifica como reservada por esta Unidad Administrativa por un periodo de **cinco años**, toda vez que se estima que dicho periodo es el estrictamente necesario para que se concluyan con las investigaciones que dieron motivo al expediente de queja que se encuentra en integración.*

- **Respecto de los procedimientos administrativos**

En términos de lo previsto en los artículos 113, fracción IX de la LGTAIP y 110, fracción IX de la LFTAIP y del lineamiento Vigésimo Octavo de los Lineamientos Generales, se precisa que podrá considerarse como información reservada, aquella que obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa correspondiente.

Prueba de Daño. *Con fundamento en los artículos 103, 104 y 114 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en donde se establece que toda causal de reserva deberá fundarse y motivarse, a través de la aplicación de la prueba de daño; para ello, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso en particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.*

PRIMERO. *Se acredita que la divulgación de la información relativa a los procesos administrativos que se encuentra en trámite, contenidos dentro de las constancias que integran el expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024; por lo que representaría un riesgo real, demostrable e identificable, toda vez que por acciones y/u omisiones de los servidores públicos, se vulneraron derechos humanos, por lo que el informar el número y la información del proceso administrativo que la autoridad ha remitido en cumplimiento a la Recomendación es información*

sensible de las partes que podrían afectar la integridad de los involucrados en la investigación que se están sustanciando ante los Órganos Fiscalizadores, así como inhibir la participación de terceros para coadyuvar en la investigación correspondiente, alterar el curso de la investigación, o incluso, la determinación definitiva que conforme a derecho corresponda, lo que representaría que la medida de satisfacción como parte de la reparación integral del daño en la citada recomendación se vea vulnerada; lo anterior, en atención al artículo 27, fracción IV y 73, fracciones I, III y V, de la Ley General de Víctimas.

SEGUNDO. Es de resaltar que el riesgo que supone la divulgación de la información en comento supera el interés público de que se difunda, en razón de que la salvaguarda de la integridad de las partes es fundamental para la continuidad de la investigación que realiza ante Órgano Fiscalizador, el esclarecimiento de los hechos y la determinación definitiva que proceda en este caso, en tanto que su divulgación podría dar lugar a alteraciones en elementos con valor probatorio, afectaciones a la integridad de las partes o de los coadyuvantes en las investigaciones que se estén sustanciando.

TERCERO. La clasificación de la información es limitativa y se adecua al principio de proporcionalidad, representando así el medio menos restrictivo disponible, en virtud de que la reserva de información únicamente se aplica a la información relativa a los números de investigación o queja y/o el número del procedimiento de responsabilidad, procesos penales, que se señalen las autoridades recomendadas en las pruebas de cumplimiento que han remitido como parte del expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, así como la información que se refiere a actuaciones, que las autoridades recomendadas realizan ante los procedimientos, con el objeto de evitar menoscabo alguno en la conducción de la investigación o de poner en riesgo la integridad de los involucrados. Asimismo, la clasificación es proporcional dado que sólo se realiza por un tiempo definido; por lo que tomando en cuenta que para resolver las investigaciones o quejas, así como los procedimientos de responsabilidad que se relacionan con el seguimiento de la recomendación que nos ocupa, la autoridad responsable tiene la obligación de desahogar todas las pruebas ofrecidas y allegarse de los elementos que le permitieran emitir la resolución correspondiente, respetando ante todo las garantías de audiencia y seguridad jurídica establecidas en los artículos 1, y 108, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Periodo de reserva: *En consecuencia, se considera necesario reservar por un periodo de **cinco años**, de conformidad con lineamiento Trigésimo Cuarto, de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas.*

Por lo anterior;

SE ACUERDA RESOLVER:

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 65 fracción II, 102 y 140 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver la presente solicitud de información pública.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 113 fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se **CONFIRMA** la **CLASIFICACIÓN** parcial de información **CONFIDENCIAL**, con relación a los datos personales contenidos en el expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, requerido por la persona solicitante, relativos a; nombre o seudónimo relativos a las víctimas, familiares de víctimas y testigos; domicilio de personas físicas; número telefónico; correos electrónicos; nacionalidad, lugar, fecha de nacimiento y edad; estado civil; ocupación; Clave Única de Registro de Población (CURP), Acta de Nacimiento; Registro Federal de Contribuyentes (RFC); credencial de elector, sexo; género; número de pasaporte; números de cédula profesional; tarjeta de Identidad, número de licencia de conducir y nivel educativo.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 110, fracciones IX, XI y XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 113, fracciones IX, XI y XII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se **CONFIRMA** la **CLASIFICACIÓN** parcial de información **RESERVADA**, en cuanto a los datos que obran en el expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, requerido por la persona solicitante, los cuales constan de: expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado, así como aquella que se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público y de procedimientos para fincar responsabilidad a los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa, por un periodo de **cinco años**.

CUARTO. Con fundamento en los artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 108, 118 y 119 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como el Segundo, fracción XVIII, Noveno, Quincuagésimo octavo, Quincuagésimo noveno, Sexagésimo de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas, se le instruye a la **Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos**, elaborar la versión pública del expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024, en

las que se supriman las partes o secciones clasificadas, previo pago por concepto de costos de reproducción de la información, de conformidad con lo previsto en los artículos 137, 138 y 139 de la Ley Federal en comento, a efecto de ser entregada a la persona solicitante.

Así lo resolvió por unanimidad de votos de sus miembros el Comité de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.”

No omito mencionar que el acta de la sesión Cuadragésima sesión ordinaria del Comité de Transparencia, de fecha 07 de noviembre de 2024, relacionada con la presente solicitud de acceso a datos personales, podrá consultarla en la siguiente liga electrónica: <https://www.cndh.org.mx/transparencia/actas-de-comite-de-transparencia>.

Una vez descrita la clasificación de la información, atendiendo la modalidad preferentemente de entrega de la información elegida por la usted, la cual fue “*Electrónico a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la PNT*”; en ese sentido, le comento que este Organismo Autónomo se encuentra materialmente imposibilitado a la entrega de la información a través de medios electrónicos, considerando que se tiene un impedimento justificado, toda vez que obra de manera física en original, lo que implicaría un análisis y procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepasa las capacidades técnicas, es decir, para elaborar la versión pública implica, entre otros actos, fotocopiar el original y realizar el testeo de la información confidencial sobre la copia fotostática y disponer de recursos humanos para la digitalización de la documentación; en consideración resultan aplicables los Criterios 8/13 y 8/17 del INAI, mismos que se dicen:

Criterio 8/13. *“Cuando exista impedimento justificado de atender la modalidad de entrega elegida por el solicitante, procede ofrecer todas las demás opciones previstas en la Ley, la entrega de la información debe hacerse, en la medida de lo posible, en la forma solicitada por el interesado, salvo que exista un impedimento justificado para atenderla, en cuyo caso, deberán exponerse las razones por las cuales no es posible utilizar el medio de reproducción solicitado. En este sentido, la entrega de la información en una modalidad distinta a la elegida por el particular sólo procede, en caso de que se acredite la imposibilidad de atenderla. Lo anterior, ya que si bien, los sujetos obligados deben privilegiar, en todo momento, el derecho de acceso a la información, ello no implica que desvíen su objeto sustancial en la atención y trámite de las solicitudes efectuadas bajo la tutela de dicho derecho. Así, cuando se justifique el impedimento, los sujetos obligados deberán notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades de entrega que permita el documento, tales como consulta directa, copias simples y certificadas, así como la reproducción en cualquier otro medio e indicarle, en su caso, los costos de reproducción y envío, para que pueda estar en aptitud de elegir la que sea de su interés o la que más le convenga. En*

estos casos, los sujetos obligados deberán intentar reducir, en todo momento, los costos de entrega de la información y garantizar el debido equilibrio entre el legítimo derecho de acceso a la información y las posibilidades materiales de otorgar acceso a los documentos.”

Criterio 8/17. *“Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.”*

Atendiendo lo previsto en el artículo 136 de la LFTAIP, se ofrecen diversas opciones para poder efectuar la entrega de la información, dichas modalidades son: copia simple, copias certificadas, o si lo prefiere enviadas a su domicilio por correo certificado, todas ellas se realizarán previo el pago de los costos de reproducción de la información más gastos de envío, o bien, podrá tener acceso a los expedientes materia de la presente solicitud mediante la modalidad de consulta directa.

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 y 145 de la LFTAIP, así como por el Acuerdo General por el que se establecen las cuotas de acceso a la información pública en posesión de las unidades administrativas y/o áreas responsables de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, mediante la modalidad de entrega de expedición de copias simples o certificadas y otros medios, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de septiembre de 2007, le informo que el costo de reproducción de la información requerida en la modalidad de copia simple asciende a la cantidad de \$0.50 (50/100 M.N.) por hoja, mientras que en copia certificada a \$1.00 (Un peso 00/100 M.N.) por hoja.

Como se había informado en párrafos anteriores, el número de fojas a reproducir en cuanto al expediente de seguimiento de la Recomendación 153VG/2024 es la cantidad de **999** fojas; cabe señalar que, en atención al segundo párrafo del artículo 145 de la LFTAIP, tratándose de copias simples usted sólo deberá pagar el costo de reproducción de **979** fojas, en consecuencia, el costo de reproducción de la información requerida en la modalidad de copias simples tiene un costo de **\$489.50** (Cuatrocientos ochenta y nueve pesos 50/100 M.N.), mientras que, en la modalidad de copia certificada asciende a la cantidad de **\$999.00**. (Novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.).

Adicionalmente, si usted elige que la información sea enviada a su domicilio deberá realizar el pago por concepto de envío por la cantidad de **\$150.00** (Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.),

Por lo que, usted deberá cubrir el costo de reproducción de la documentación, mediante depósito de la cantidad seleccionada en cualquier sucursal BANORTE. Al efectuar el pago ante la sucursal bancaria deberá indicar los siguientes datos:

- a) Número de empresa que corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 124980
- b) Referencia 1: 11501-4
- c) Referencia 2: 14
- d) Referencia 3: Nombre completo de quien realiza el depósito el cual debe coincidir con el de la persona que presentó la solicitud de acceso a la información, a fin de identificar plenamente el depósito.

Previo aviso a este Organismo de la modalidad elegida, la ficha de depósito en la que conste el sello del banco que acredite el pago correspondiente, deberá entregarse en las oficinas de la Unidad de Transparencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sita en Periférico Sur 3469, colonia San Jerónimo Lídice, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, C.P. 10200, Ciudad de México, o bien, vía correo electrónico: transparencia@cndh.org.mx, a efecto de estar en posibilidad de proceder a elaborar la versión pública en términos del artículo 138 de la LFTAIP.

A mayor abundamiento, en observancia a lo dispuesto en los artículos 137, 138 y 139 de la LFTAIP, la versión pública de la documentación requerida se elaborará una vez que el solicitante compruebe haber realizado el pago del costo de reproducción de la misma, el cual deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no mayor a **treinta días**.

En ese sentido, una vez cubierto el monto por costos de reproducción, la información solicitada se elaborará, para su posterior entrega y se encontrará disponible en las instalaciones de este Organismo Nacional durante un plazo no menor a **sesenta** días posteriores una vez cubierto el costo de reproducción.

Asimismo, de conformidad con el artículo 128 de la LFTAIP, si usted elige la modalidad de consulta directa de dichos documentos, deberá comunicarse con los siguientes servidores públicos con la finalidad de concertar la cita correspondiente. No se omite mencionar que, si derivado de la consulta directa resulta de su interés alguno de estos documentos, se le proporcionarán en copia simple o

certificada, previo pago de derechos conforme a los montos señalados anteriormente.

- Responsables: Mtro. Luis Rivera Ortiz Visitador Adjunto, Lic. Jose Alberto Nava Arias, Subdirector de Seguimiento de Recomendaciones.
- Contacto: lriviera@cndh.org.mx; jnavaa@cndh.org.mx
- Teléfono 55 5681 8125, Ext(es): 5516 y 5525

En caso de que no fuese posible la consulta de la totalidad de la información, la persona solicitante podrá solicitar al personal designado que se programe una nueva cita. Lo anterior, conforme a lo previsto en el lineamiento septuagésimo segundo de los “Lineamientos Generales en materia de Clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas”.

Las medidas de protección de los datos personales contenidos en los expedientes de recomendación en la modalidad de la consulta directa. Por lo que se le hace de su conocimiento que las medidas de seguridad que se implementarán consistirán en:

1. La presencia permanente de un servidor público para la atención de dicha consulta y el debido resguardo de la información;
2. No hacer una incorrecta manipulación de la documentación;
3. No alterar el contenido de los documentos;
4. No hacer anotaciones o apoyarse sobre los documentos;
5. No señalar los documentos, doblando las esquinas de estos;
6. No manipular la documentación con las manos sucias;
7. No ingerir ningún tipo de alimento durante la consulta;
8. No humedecerse los dedos para hojear la documentación; en su caso, utilizar dedal de plástico; y
9. No sustraer documentación alguna.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los artículos 100, 106 fracción I, 116, 129 y 137 de la LGTAIP, y 97, 98 fracción I, 113, fracción I y 140 de la LFTAIP; artículo 3, fracción IX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como los numerales cuarto, quinto, trigésimo octavo, fracción I, quincuagésimo noveno, septuagésimo y septuagésimo primero de los “Lineamientos Generales en materia de Clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de las versiones públicas”.

En concordancia con lo anterior, se hace de su conocimiento que de conformidad con los artículos 118, 119, 121 y 122 de la Ley General de Archivos existen sanciones y delitos contra los archivos como son: sustraer, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar total o parcialmente información y documentos de los archivos que se encuentren bajo su resguardo en la consulta directa.

Por otra parte, se le comunica que en términos de los artículos 4 y 6 de la Ley General de la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en correlación con el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los datos personales proporcionados por usted serán utilizados de manera confidencial.

Finalmente, de considerarlo necesario, podrá interponer el Recurso de Revisión previsto en el artículo 142 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en el artículo 147 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E
MTRA. MARÍA JOSÉ LÓPEZ LUGO
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

DJAC